

El sistema político mexicano hacia una democracia de coaliciones

Dr. Andrea Bussoletti

Universidad de Guadalajara

La presencia de alianzas entre partidos dentro del sistema político mexicano representa un elemento constante desde la segunda mitad del siglo XX, en el contexto de hegemonía partidista del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo es a partir de la apertura pluralista impulsada por las reformas electorales del último cuarto del siglo pasado y que llevaron a la alternancia al gobierno federal en 2000, que las coaliciones entre partidos se convierten en un fenómeno relevante en la vida política nacional. La consolidación de la democracia electoral al mismo tiempo ha sido acompañada por una progresiva erosión del consenso y de la legitimación de los partidos políticos antes de la opinión pública, como evidenciado en distintas ocasiones por estudios sociológicos y demoscópicos, así como por la tendencia al incremento de la volatilidad electoral y de la fragmentación partidista. Ante este escenario las coaliciones han modificado su rol dentro del sistema de partidos, como evidencia su mayor implementación en el proceso electoral intermedio de 2021. El objetivo del presente trabajo es mostrar en qué manera las coaliciones fueron implementadas en los dos recientes procesos electorales entre 2015 y 2023. De la misma manera se analizarán los intentos de consolidar estas alianzas en la vida congresual del país, para ver hasta qué punto siguen existiendo como meros mecanismos electorales y si efectivamente estamos asistiendo o menos a una evolución de las dinámicas políticas en el país.

Introducción

El 2 de junio de 2018, una vez concluida la elección para la renovación de la Presidencia de la República mexicana y de los integrantes del Congreso de la Unión, el sistema político mexicano pareció atravesar un momento de ruptura en su historia reciente. El regreso a un escenario de gobierno unificado después de más de veinte años –la última legislatura en que el presidente contaba también con la mayoría absoluta en el Congreso fue la LVI entre 1994 y 1997 bajo el gobierno de Ernesto Zedillo– fue visto en el inmediato como una señal preocupante y una potencial condición para un retroceso autoritario en el país. A la conclusión del sexenio obradorista, concluida la LXIV legislatura (2018-2021) y encaminada a las LXV a su terminación, es posible trazar un balance para ver qué tanto de esta preocupación se reveló fundamentada. Desde luego muchos intelectuales y *opinion makers*

retomaron la expresión sartoriana de “sistema de partido hegemónico” (Sartori, 1976) bajo el temor que se volvieran a presentar prácticas que se habían ido debilitando a partir de la primera alternancia electoral en el año 2000. Dicha inquietud traía sustento también del estatus en que se presentaba la oposición partidista a la conclusión del proceso electoral de 2018: debilitada tanto en término de imágenes como de consenso electoral, no parecía representar una amenaza para López Obrador y su gabinete.

Si bien estos temores podían por lo tanto parecer sustentados, por otro lado había elementos novedosos y no comparables con las características que el sistema político mexicano había perpetrado a lo largo del Siglo XX. Un par de evidencias en particular, que son objeto del presente trabajo, marcan una diferencia sustancial a tal propósito. Por un lado se registran una contiendas electorales con un mayor número de organizaciones partidistas admitidas a participar en la vida pública y con capacidad de acceder a cargos representativos: en 2018 participaron en las elecciones para cargos públicos nacionales un total de nueve partidos políticos y en la contienda sucesiva, la intermedia de 2021, este número se incrementó de una unidad, por un total de 10 formaciones partidistas registradas ante el Instituto Nacional Electoral. El segundo aspecto novedoso fue la consolidación de una forma peculiar de participar en los procesos electorales, es decir las coaliciones. La presencia de alianzas entre partidos no representa en sí una novedad sucesiva a la transición democrática, teniendo varios antecedentes en la época de mayor auge del PRI. En 1946 por ejemplo, Juan Andrew Almazán compitió en la elección presidencial de 1940 como candidato del Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN) con el respaldo del Partido Laborista Mexicano (PLM) y del recién fundado Partido Acción Nacional (PAN). Después de casi medio siglo, en 1988 Cuauhtémoc Cárdenas, fue postulado a la presidencia de la república por el Frente Democrático Nacional, nombre bajo el cual se aliaron una pluralidad de partidos y grupos políticos, incluyendo la Corriente Democrática que a mediados de los años Ochenta el mismo Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo fundaron en ruptura con la línea política neoliberal de la presidencia de Miguel De La Madrid y otros partidos registrados cuales el Partido Mexicano Socialista (PMS), el Partido de la Auténtica Revolución Mexicana (PARM), el Partido Popular Socialista (PPS) y el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN).

Sin embargo es con la transición hacia el nuevo siglo y hacia la democracia que la presencia de coaliciones en el sistema político se transforma, adquiriendo importantes elementos

novedosos. La ampliación de la oferta política a lo largo de los años Noventa del Siglo XX produce la aparición de nuevos partidos con un limitado capital electoral, que ya no actúan como satélites de las fuerzas mayoritarias y que buscan aprovechar de manera estratégica su capacidad de negociación (Panebianco, 2009). La primera coyuntura ilustrativa de esta transformación se dio en el año 2000: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en su segunda participación en proceso electoral nacional después de haber obtenido el registro en 1997, conformó junto con el PAN la “Alianza por el Cambio”, que se impuso en las urnas provocando la primera alternancia a nivel federal al gobierno del país. En ese entonces, la alianza presentó un logotipo común, lo que no permite establecer con precisión la consistencia de la aportación de votos del aliado menor para ganar la contienda. Sin embargo es importante recordar que Vicente Fox ganó la elección con un margen de 6% de votos sobre el candidato del PRI Francisco Labastida, lo que hace suponer que el peso de los sufragios al Partido Verde fueron si no decisivos, al menos significativos, en marcar el resultado de la contienda. Una percepción que no se dio de manera inmediata y que no dio lugar a un mayor protagonismo de las coaliciones en la vida pública: al contrario Fox conformó un gabinete integrado exclusivamente por panistas, lo que provocó con el paso del tiempo la ruptura de la alianza, tanto que de ahí en adelante el PVEM decidió reubicarse dentro del tablero político y por todo el periodo entre 2006 y 2018 se ha presentado nacionales como principal aliado del PRI.

El ampliarse de la oferta política con la aparición de nuevas fuerzas como Panal, el PT y MC ha provocado por lo tanto una atomización de la oferta política, que a nivel de sistema implicó una reducción de la cantidad de votos necesarios para ganar las contiendas electorales. No a caso, desde 2000 hasta 2012 los presidentes electos sumaban porcentajes de votos entre 36% y 42%. Ante un sistema electoral donde la asignación de una cuota mayoritaria de cargos representativos con fórmula plurality, crece el número de los partidos minoritarios y tienden a proliferar las coaliciones: A través de este instrumento se genera un intercambio en donde las fuerzas políticas menores pueden ofrecer su cantidad de votos que pueden resultar decisivos para que el aliado mayor gane. A cambio los aliados menores obtienen la asignación de candidaturas en el marco de la coalición y en la cuota de curules repartidas por mayoría relativa, logrando de esta manera una significativa cantidad de cargos a pesar de su limitada votación. Este fenómeno, conocido como proporcionalización del voto de mayoría (Bartolini y D’Alimonte, 1994) es común a todos aquellos sistemas que permiten la coexistencia de las coaliciones con el mecanismo de la mayoría. Este fenómeno de todas

formas se ha consolidado sólo en tiempos recientes, en particular debido a la coexistencia de dos factores: uno radicado en la sociedad y otro en el marco normativo.

A nivel social una gran cantidad de estudios muestran un fenómeno marcado de desafección política (Cortés Guardado, 2020) y de desalineamiento partidista (Díaz Jiménez y León Ganatios, 2019). Estos dos fenómenos representan dos caras de la misma moneda, aunque en términos teóricos no necesariamente siempre coexisten. Una población de electores puede transitar por un ciclo histórico de desalineamiento, que la lleve a abandonar lealtades políticas consolidadas por una amplia gama de razones y que tiende a traducirse en altos valores de volatilidad electoral entre una votación y la siguiente. Sin embargo todavía en este escenario es posible que los ciudadanos se perciban afianzados al rito político, con la sola peculiaridad de romper una disciplina partidista para reorientarse hacia otras organizaciones políticas. En el caso de la desafección lo que se observa es un venir menos de la vinculación entre el ciudadano y las instituciones políticas y electivas. Por lo tanto el crecer de la desafección representa una amenaza de mayor gravedad para los sistemas democráticos contemporáneos, debido al hecho que los ciudadanos llegan a considerar inútil y desperdiciado el ejercicio del derecho de voto. Estudios como el Latinobarómetro y otras encuestas y medición de opinión muestran a tal propósito un acelerado crecimiento de aquel sector de población que se autoproclama “independiente”, es decir de aquellas personas que no manifiestan sentimientos de identificación con ningún partido político, aunado al hecho que los mismos estudios arrojan que los partidos gozan de muy bajas calificaciones en termino de confianza y también a la cuota, minoritaria pero en significativo crecimiento, de aquellos entrevistados que afirman preferir un sistema autoritario a uno democrático. Este escenario poco alentador para quien se dedica de manera profesional a la actividad política ha inducido a la misma clase política (Mosca, 2004) buscar instrumentos para contrarrestar la tendencia e implementar estrategias para seguir existiendo (Bussoletti, 2020). Una de ellas es supuestamente la conformación de coaliciones, como medio para mantenerse vigentes dentro del esquema de la competencia electoral, minimizando los riesgos de no alcanzar el umbral de votos necesarios para acceder a los cargos públicos y mantener el registro ante el Instituto Nacional Electoral.

En el ámbito normativo se puede encontrar en la reforma electoral del 2014 la formalización de la posibilidad de crear alianzas entre distintos partidos, que se traduce en la presencia de tres tipos de modalidades: las fusiones, las coaliciones y los frentes. De la primera modalidad tipificada en el art. 93 de la LGPP se puede afirmar que hasta la fecha, a casi diez años de

distancia de la introducción del texto normativo, no se ha registrado ninguna solicitud, lo que confirma que los partidos, pese a las dificultades y a la percepción negativa que los rodea, concentran sus esfuerzos en sobrevivir, evitando a toda costa su disolución dentro de nuevos sujetos políticos. El análisis cambia y se hace más ilustrativo cuando se analizan las otras dos modalidades. Los artículos que van desde el 87 hasta el 92 describen las coaliciones electorales, mientras que el art.86 define y describe el funcionamiento de los frentes. Tan solo el dato numérico de la cantidad de artículos, aunque pueda parecer una simplificación excesiva, es útil para comprender que las coaliciones tienen una importancia mayor dentro de las dinámicas políticas nacionales. El punto clave para entender este escenario consiste en el hecho que el Frente, en su descripción, corresponde a una colaboración entre partidos en tiempos no electorales, con una duración en el tiempo y una capacidad de influir en el comportamiento de las organizaciones políticas que lo conforman al interior de las instituciones representativas. Al contrario las coaliciones representan una alianza de tipo exclusivamente electoral: los partidos que las conforman se acuerdan para presentarse en conjunto en las urnas, para luego tener la libertad de poder decidir si dar continuidad o menos a la colaboración con otras organizaciones partidistas, sin tener que rendir cuentas jurídicamente por el cambio de estrategia política. Si bien la historia reciente, como se verá en el próximo apartado, ha evidenciado que algunas alianzas se han mantenido en el tiempo y replicado en procesos electorales consecutivos, en línea general prevalece el principio que pasada la elección cada fuerza política actúa de manera individual, sin la obligación de actuar en coordinado con otras. Mientras los frentes implican un mayor costo en término del desgaste derivado de las negociaciones con otros grupos políticos y ventajas limitadas, las coaliciones tienden a presentar un balance de signo opuesto: son rentables, “cuestan” poco y se pueden terminar a conveniencia a la conclusión del proceso electoral. Bajo estas premisas podemos observar como en el periodo sucesivo a la reforma y en particular en los procesos electorales nacionales de 2018 y 2021 las coaliciones se han convertido en una presencia con raíces más sólidas en el sistema político nacional.

Las coaliciones de 2015 a 2023

Los efectos de la reforma electoral de 2014 en tema de partidos políticos no se manifestaron de inmediato en el proceso electoral nacional del año siguiente: en aquella ocasión no se registró de hecho ninguna coalición y todos los partidos compitieron de manera individual. Esta configuración de la contienda en aquel contexto no debe de sorprender, por una amplia serie de argumentos. En primer lugar, por el hecho que en la historia del México

contemporáneo las elecciones intermedias representan una oportunidad para medir de manera fehaciente las relaciones de fuerzas entre partidos. Además en 2015 se concluyó una legislatura marcada por un largo tramo por la colaboración entre los entonces tres principales partidos (PRI, PAN y PRD), quienes habían respaldado el proyecto reformador de la presidencia peñista en el marco del “Pacto por México” y que buscaban en la elección recuperar parte de aquel consenso que podía haber perdido por efecto de la colaboración con quienes habían sido considerado por décadas los mayores rivales. Junto con ello, la aparición de partidos en su primera contienda electoral y entre ellos el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) indujeron a los competidores a participar de manera individual.

El tablero político cambió significativamente en los dos años siguientes. En 2015 el PRI se conservaba como primera fuerza a nivel nacional, pero perdió en algunos estados significativos por su población y su peso político, como en el caso de la gubernatura de Nuevo León. Al mismo tiempo MORENA, en su primera aparición alcanzaba el 8% de la votación nacional, ubicándose en el cuarto lugar, a una breve distancia del PRD. La aparente estabilidad del sistema político vino menos de manera muy espectacular en el bienio sucesivo, también en parte por equivocaciones y errores de comunicación de Enrique Peña Nieto, en coyunturas como la visita de Donald Trump en México en 2016 o del anuncio del incremento de los precios de la gasolina en 2017, evidenciando la abierta contradicción con los anuncios y las promesas anunciadas con la reforma energética que el mismo gabinete peñista aprobó al principio de su mandato. La crisis del PRI abrió una ventana de oportunidad para su desplazamiento de la presidencia en 2018. Al principio este escenario pareció tener como mayor beneficiario al PAN, en continuidad con la lógica de la alternancia bipartidista que se había conformado desde el año 2000. En particular el proceso electoral de 2016 fue un nudo trascendental en la política nacional. En aquel entonces el PRD, debilitado por la pérdida de cuadros dirigentes y de votos migrados a MORENA, aceptó la fórmula de la participación en coalición como aliado menor del PAN en varios estados. Las alianzas PAN-PRD lograron concretar la alternancia en entidades como Veracruz y Durango donde el PRI había gobernado sin interrupciones desde todo el Siglo XX. Los procesos electorales de 2017 si bien no registraron la presencia de coaliciones, marcaron en realidad otro paso adelante a tal propósito. Los resultados del voto en el Estado de México en particular dieron indicaciones importantes a las distintas fuerzas políticas. PAN y PRD recabaron del resultado negativo que obtuvieron participando por separado un argumento más de la necesidad de la coalición para la contienda presidencial de 2018, pese a los malhumores internos en los

partidos debido a lo que era considerada por muchos como una alianza contra natura (Espinosa y Reynoso, 2017) por la diferencia ideológica profunda entre sus integrantes. Al mismo tiempo MORENA, quien quedó en segundo lugar por un margen limitado de votos y con fuertes cuestionamientos de manipulación del resultado, pudo entender la importancia de poder sumar aliados, aún pequeños, para tener mayores probabilidades de ganar el año siguiente.

La percepción del avance de MORENA y las mediciones de encuestas que proyectaban a Andrés Manuel Lopez Obrador como favorito para la presidencia, generó una aceleración en el sistema de partidos que se tradujo en la conformación de tres coaliciones electorales en 2018. Por primera vez en la historia de las elecciones federales mexicanas todos los partidos que participaron en la contienda para la renovación de la Presidencia de la República y de los integrantes del Poder Legislativo decidieron formar parte de alguna coalición y ninguna fuerza política decidió correr en solitario. La elección fue por lo tanto entre tres opciones: la ganadora resultó ser *Juntos Haremos Historia*, integrada por Morena, PT y PES. En el segundo lugar quedó *Por México al Frente* (PAN, PRD y MC), en el tercero *Todos por México*, (PRI, PVEM, PANAL). AMLO fue electo presidente con el 52% de la votación emitida.

El triunfo de AMLO fue acompañado por la afirmación de MORENA como primer partido en la renovación de la Cámara de Diputados. Los datos inmediatos después de la elección mostraron una anomalía, en la que tenía un peso decisivo la configuración de la coalición que el mismo MORENA había conformado con PT y PES. Al principio de la campaña los tres partidos había suscrito un convenio de coalición en el cual las candidaturas fueron repartidas por partido de la siguiente manera: 50% por MORENA, 25% por PT, 25% por el PES. El efecto de este acuerdo fue, al menos inicialmente, una subrepresentación de MORENA, con 192 diputados y una sobrerrepresentación de sus aliados, respectivamente con 61 y 55 electos. En el caso de Encuentro Social el dato era aún más llamativo si se considera que en cuanto a votos el partido se quedó por debajo del 3% establecido por el INE como criterio para el acceso al registro. Con el pasar de las semanas el escenario se modificó y se aclaró en beneficio de MORENA: tanto del PT como del PES se registró una migración masiva de diputados hacia el partido de AMLO, que alcanzó antes del arranque de la Legislatura un total de 248 diputados, al límite para alcanzar la mayoría absoluta y poder conformar un escenario de gobierno unificado. Resultado que AMLO pudo obtener gracias a un acuerdo

con el PVEM, desde el cual salieron 5 diputados para pasar a las filas morenistas, garantizando de esta forma un total de 253 diputados de MORENA. Estos movimientos reforzaron la colaboración de MORENA con sus aliados, los cuales parecían actuar acorde a una imagen parecida a la de los partidos satélites del PRI en el Siglo XX. De hecho, desde aquel entonces el PVEM, que todavía en 2018 se había presentado a las urnas como aliado del PRI, decidió romper su colaboración histórica con el tricolor y ya desde 2019 empezó a participar en los procesos subnacionales como aliado de MORENA, según un patrón repetido en la amplia mayoría de los estados en los procesos electorales subnacionales sucesivos.

Por el otro lado la alianza PAN-PRD después de los entusiasmos del periodo 2016-2017 había sufrido una marcada derrota y también el PRI parecía encaminado a una crisis sin antecedentes en su historia. La fragmentación de la oposición a AMLO abrió un proceso donde los partidos tradicionales lograron dejar atrás los motivos de conflicto entre ellos y conformar una nueva alianza de partidos, cuyo objetivo sería reforzar la oposición a la presidencia obradorista. Después de titubeos, incertidumbres y de los ataques por parte del mismo presidente que acusaba los partidos de la oposición de aprovechar la pandemia de Covid-19 para conformar un bloque amplio opositor, al final PRI, PAN y PRD tomaron medidas para modificar sus estatutos y permitir la creación para el proceso intermedio de 2021 de la coalición *Va por México*.

En 2021 por lo tanto se pudo observar una novedad muy importante: por primera vez las coaliciones fueron implementadas de manera sistemática también en una elección intermedia, donde habitualmente no solían aparecer. A diferencia del proceso anterior, en esta ocasión no todos los partidos participaron en como parte de una coalición: esto se debe sobretodo a la presencia de tres partidos nuevos, que por limitaciones normativas no pueden participar en coaliciones en su primera aparición en las urnas¹; pero también se pudo encontrar la clásica excepción que confirma la regla en MC, que decidió de manera deliberada de no integrarse en ninguna alianza, en parte también por el recuerdo negativo de su participación en alianza con PAN y PRD en 2018.

Los resultados electorales reafirmaron la idea de que las coaliciones son instrumentos para incrementar la rentabilidad electoral de los partidos, quienes a título individual tienen

¹ En el caso de uno de ellos, Encuentro Solidario, en realidad es posible identificar una derivación directa de Encuentro Social, partido que perdió el registro en el proceso de 2018 y volvió a solicitarlo y obtenerlo en 2021.

menores posibilidades de ganar. El caso de MC es sumamente ilustrativo a tal propósito: en término de sufragios el partido fue premiado, pasando del 4.4% de votos del 2018 al 7.0% en 2021; pero en cuanto a diputaciones se dio la paradoja de un menor número de electos, que pasaron de los 27 a 23. Asimismo el Partido Verde, pese al obtener una cantidad inferior de votos a la de MC (5.3%), recabó ventajas importantes de su participación en la alianza con MORENA, concluyendo la votación con un total de 43 diputados electos, casi el doble de los alcanzados por el partido naranja. Por lo que concierne a los integrantes de *Va por México* el resultado se muestra más contradictorio: la alianza pareció contener los efectos de una supuesta crisis de los partidos tradicionales, quienes no registraron un retroceso significativo en términos de votos y vieron incrementada la consistencia numérica de sus grupos parlamentarios, aunque la otra coalición, Juntos Hacemos Historia, mantuvo la mayoría absoluta dentro de la Cámara.

Estas aparentes contradicciones entre el dato electoral y los niveles de representación se explican en virtud de la presencia de las coaliciones y en particular de los mecanismos que la misma normatividad establece para su creación: los partidos que suscriben dichos acuerdos están llamados a registrar ante el organismo electoral un convenio en el que se indique la repartición por partido de todas las candidaturas en común. Dependiendo del contenido, los acuerdos de coalición pueden favorecer a los partidos minoritarios, dando ellos una mayor cantidad de candidaturas con posibilidad de ganar en la votación para los cargos de mayoría relativa, según lo que se conoce como la proporcionalización del voto de mayoría (Bartolini y D'Alimonte, 1994). En definitiva se confirma el principio de que las coaliciones presentan altos incentivos para los partidos políticos, por su capacidad de representar un instrumento que reduce los efectos negativos de la imagen negativa que los rodea y maximiza los resultados electorales de quien participa en ellas.

E incierto camino hacia una democracia de coaliciones

El afirmarse de las coaliciones en la vida política parece un hecho consolidado de la revisión de la secuencia de procesos electorales a partir de 2015, tanto nacionales como estatales, sin embargo hay varios elementos que todavía impide una plena afirmación del instrumento, cuya existencia se vincula a la vida de los mismos partidos: en otras palabras los partidos aprovechan las coaliciones para perseguir sus intereses pero se deshacen de ellas en el momento que se revela más oportuno actuar de forma individual. Esta tendencia se manifiesta

con claridad en los momentos inter-electorales, es decir cuando se conforman los gobiernos y las asambleas representativas.

El plan normativo provee una serie de evidencias que ayudan a comprender el escenario: por ejemplo, según la LGPP la coalición no existe como entidad jurídica, no tiene recursos propios y opera como expresión de los partidos que la formulan, condición que implica un problema de transparencia en término de fiscalización. Asimismo la coalición no es indicada en la boleta electoral, donde el ciudadano puede identificar solo los logotipos de los partidos y los nombres de los candidatos: no hay elementos que de inmediato permiten identificar si un candidato compite por un solo partido o por una coalición. Es interesante notar que, por ejemplo, no pasa lo mismo con las candidaturas independientes, las cuales son indicadas por escrito en la boleta, lo que permite al votante distinguirlos de los que son expresión de algún partido político. Por lo tanto solo el elector informado, que conoce los candidatos por documentarse durante la campaña y el votante atento, que revisa con meticulosidad todos los nombres reportados por cada logotipo partidista, son quienes identifican la presencia de alianzas entre partidos. Este factor tiene el efecto de poder confundir al elector y también genera un fenómeno muy peculiar durante las campañas electorales, solitamente en los meses conclusivos: después de presentarse como parte de un solo bloque, los partidos suelen cerrar las campañas invitando a votar por ellos y a ejercer un voto en bloque, para tratar de tener un mayor peso al interior de la coalición misma.

La lagunosa normatividad vigente sobre las coaliciones, que hace que de facto ellas existan solo como cartel de partidos en una contienda electoral, hace de este un instrumento ventajoso para los partidos, relativamente económico en término de costos políticos y cuya mayor dificultad representa el manejo del desgaste en término de imagen pública, sobre todo en aquellos casos en donde hay visiones ideológicas distintas entre sus integrantes (como en el caso de la alianza PAN-PRI-PRD).

Al mismo tiempo las coaliciones han tenido dificultad a afirmarse fuera del momento electoral y en este sentido se pueden presentar una serie de argumentos y evidencias históricas relevantes. El más evidente es la ausencia hasta la fecha de gobiernos de coalición. En la actualidad los aliados de MORENA se muestran muy disciplinados y leales con su aliado mayor, salvo raras excepciones, pero no tienen - por voluntad propia o ajena no sabemos - el acceso a cargos del gobierno federal, con todas las secretarías asignadas al

partido mayoritario. Los gobiernos de coalición, fenómeno más típico de los entornos parlamentarios que de los presidenciales, representarían una novedad importante, con el beneficio de una mayor responsabilización de los partidos de mayoría, pero también con el riesgo de crear condiciones para conflictos políticos y de menor rendición de cuentas electorales.

Al mismo tiempo la colaboración legislativa entre los partidos se mueve en un constante entorno de incertidumbre. En las dos legislaturas que se desarrollaron desde 2018 los partidos de oposición modificaron en muchas ocasiones su conducta estratégica, moviéndose entre los extremos de una postura intransigente hacia el gobierno de AMLO y la posibilidad por el otro lado de negociar su apoyo a determinadas políticas públicas o ante ciertas coyunturas. Estas ambigüedades determinaron en primer lugar la disolución del Frente que en 2017 habían conformado PAN, PRD y MC, con este último en particular que desde aquel entonces ha evadido a toda costa la posibilidad de incorporarse nuevamente - salvo repensamientos en función del voto presidencial de 2024 - en alguna alianza de partidos. Después la colaboración entre PRI y PAN, quien dio lugar a la coalición Va Por México en 2021 ha vivido etapas de consolidación y otras de debilitamiento, en particular por la vaguedad de las posturas del PRI dentro del recinto legislativo, que en varias circunstancias han llevado algunos críticos a usar la expresión PRIMOR para denunciar la cercanía entre el partido de AMLO con el Partido Revolucionario Institucional.

En convulsión se puede afirmar que el sistema político mexicano está en un incierto camino rumbo a la transformación en una democracia de coaliciones: el marcado avance registrado desde 2015 a la fecha no significa que no queden todavía cabos sueltos y tareas pendientes, así como parece confirmada la lectura que ve en las coaliciones más una herramienta al servicio de la clase dirigente de los mismos partidos para perpetuarse que una forma para innovar la vida política en el país.

Bibliografía

Bartolini, S. y D'Alimonte, R. (1994). *Maggioritario ma non troppo. Le elezioni italiane del 1994*. Bologna: Il Mulino

Bussoletti, A. (2020). “En búsqueda de legitimación: partidos y clase política ante la desconfianza de los mexicanos” *Acta Republicana*, (19), 31-40.
<http://148.202.248.171/republicana/index.php/AR/article/view/52/>

Cortés Guardado, M. (2020). *¿Partidos sin partidarios?* (1.^a ed.). - Publicado en asociación con: Universidad de Guadalajara Grupo editorial: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUCSH. <https://editorial.udg.mx/gpd-partidos-sin-partidarios.html>

Díaz Jimenez, O. F., & León Ganatios, L. (2019). *Los escenarios electoral e ideológico en el sistema de partidos mexicano: Una mirada posterior a la elección 2018*. Tirant Lo Blanch.

Mosca, G. (2004) *La clase política*. Fondo de cultura economica.

Panebianco, A. (2009). *Modelos de partido. Organización y poder en los partidos políticos*. Madrid: Alianza Editorial

Reynoso, D., & Espinosa Santiago, O. (2017). *¿Alianzas contra natura o antihegemónicas? Las alianzas PAN-PRD en los Estados Mexicanos*. Tirant Lo Blanch.

Sartori, G. (1976). *Partidos y sistemas de partido*. Madrid: Alianza Editorial